



## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

En la Ciudad de México, siendo las **ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**, en audiencia pública **Yadira Elizabeth Medina Alcántara**, Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de **Víctor Manuel Meixueiro Galán** Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo **239/2022**, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, siendo que en términos del Acuerdo General **21/2022** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar **21/2020**, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la presente audiencia se celebra a distancia, dado que no se trata de actos de los prohibidos del artículo 22 constitucional respecto de los cuales las partes hayan solicitado su celebración vía remota; de ahí que se declare abierta sin la comparecencia de las partes, ni persona alguna que legalmente las represente.

**La Jueza acuerda:** Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta sin la asistencia de las partes.

**Abierta la audiencia:** el Secretario hace una relación de todas las constancias que se encuentran agregadas en los presentes autos entre las que se encuentran: escrito de demanda, auto de diecisiete de febrero del año en curso, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo, escritos de ampliación, auto de treinta de marzo y cinco de octubre, ambos de dos mil veintidós, por los que se admitieron a trámite las ampliaciones de demanda; y con las demás constancias que integran el expediente.

De igual forma, se da cuenta con el oficio y escrito registrados por la oficialía de partes bajo los números **25289 y 25332** con firma electrónica y autógrafa.

Asimismo, certifica que de la agenda de visitas "OJ" no se advierte que alguna de las partes hubiera agendado cita de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

**La Jueza acuerda:** se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales procedentes. De igual forma, se tiene por hecha la certificación de que ninguna de las partes hubiera agendado cita para comparecer a la celebración de la presente audiencia constitucional.

Se agrega a los autos el oficio signado en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y el escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante los cuales realizan diversas manifestaciones, las cuales con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas en vía de **alegatos** para los efectos legales conducentes.



VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

mento en  
tidad y d  
ebas ante  
ón al mor

**S:** el Sec  
stración T  
e el Fisco

nción a

tes por de  
l y se pa

sus representantes legales, contra actos del **Congreso de la Unión y otras autoridades;** y

## AND DO:

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

egales, se  
en contra  
continuació

- por las Cámaras  
Estados Unidos  
n Tributaria?

- formado por  
reclama:

del "Decreto  
disposicion  
puesto al Va  
n y Servicios  
os, del Cód  
de octubre



JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del mismo año, exclusivamente por lo que hace a la **adición de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 84-M y 84-N y la reforma a los artículos 49, primer párrafo, fracciones I y VI, todos ellos del Código Fiscal de la Federación...**

**B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos**, se reclama la expedición el 10 de noviembre de 2021 del Decreto Promulgatorio del Decreto Legislativo referido en el inciso **A**, anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de 2021 en específico por la adición de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32 B Quinquies, 32-D, fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 84-M y 84-N y la reforma a los artículos 49, primer párrafo, fracciones I y VI, todos ellos del Código Fiscal de la Federación...

**C. De la C. Jefa del Servicio de Administración Tributaria** se reclama la expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, específicamente por lo que hace a sus numerales 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23...

Con fundamento en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, mi mandante impugna la inconstitucionalidad de la norma general que reclama de forma autoaplicativa..."

**SEGUNDO (DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS).** La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación, sin que hubiere designado a persona alguna en su carácter de tercero interesado.

**TERCERO (ADMISIÓN).** En auto de **diecisiete de febrero de dos mil veintidós**, se registró la demanda con el número **\*\*\*\*\***, se **admitió** a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó al Fiscal Ejecutivo Titular la intervención que legalmente le compete, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

**CUARTO (PRIMERA AMPLIACIÓN).** Mediante escrito registrado con el folio **4982**, las sociedades quejasas ampliaron la demanda de amparo. Asimismo, previo desahogo de prevención por auto datado el **treinta de marzo de dos mil veintidós**, se desechó por una parte y, por la otra, se **admitió** parcialmente la ampliación contra el acto que reclama con motivo de la aplicación de las normas generales señaladas en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se otorgó al Fiscal Ejecutivo Titular la intervención que legalmente le compete.

**QUINTO (SEGUNDA AMPLIACIÓN).** Por ocurso registrado con el folio **22781**, las quejasas nuevamente ampliaron su escrito inicial respecto del acto que indicó. En consecuencia, mediante acuerdo del **cinco de octubre del dos mil veintidós**, se **admitió** la ampliación propuesta, se solicitó al Fiscal Ejecutivo Titular la intervención que le corresponde y únicamente se hizo del





**SEXTO (AUDIENCIA CONSTITUCIONAL).** Previos tramites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual inició conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y,

## CONSIDERANDO.

**SEGUNDO (FIJACIÓN DE LA LITIS).** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Véase la jurisprudencia P./J. 40/2000, que lleva por rubro: ***“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”***. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000. Materia Común. página 32. Registro: 192097.

VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.37  
07/08/24 16:12:01



pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión.

Así, al fijar los actos reclamados, la persona juzgadora debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solamente de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto<sup>3</sup>.

A partir de las anteriores consideraciones y de una interpretación integral de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, esta juzgadora concluye que las quejas reclaman lo siguiente:

De las **Cámaras de Diputados y Senadores**, ambas del **Congreso de la Unión**, así como del **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

- La aprobación, expedición y promulgación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente los artículos **32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 49 primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, todos del Código Fiscal de la Federación.**

**Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria:**

- La expedición de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2022”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, específicamente las reglas **2.8.1.20**, **2.8.1.21**, **2.8.1.22** y **2.8.1.23**.
- El requerimiento realizado por la quejosa \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* a  
\*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , para que proporcione información y  
documentación relacionada con el beneficiario controlador,  
derivado de su futura participación como \*\*\*\*\*  
en el \*\*\*\*\* , previamente  
constituido y en el que la quejosa actúa como \*\*\*\*\* ,  
en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los  
artículos 32 B Ter, 32 B Quáter, 32 B Quinquies y demás  
disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la  
Federación.

<sup>3</sup> Así lo estableció en la tesis P. VI/2004 que lleva por rubro: **“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”**. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, página 255. Registro 181810.



➤ El requerimiento realizado por la quejosa \*\*\*\*\* \*\* \*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* para que proporcione la información y documentación relacionada al beneficiario controlador, derivado del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* en cumplimiento a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42 fracciones XII y XIII, 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación.

**TERCERO (INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS).** No son ciertos los actos reclamados al **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores**, estas dos últimas del **Congreso de la Unión**, así como al **Jefe del Servicio de Administración Tributaria** consistentes en:

➤ El requerimiento realizado por la quejosa \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ,

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , para que proporcione información y documentación relacionada con el beneficiario controlador, derivado de su futura participación como \*\*\*\*\* en el \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , previamente constituido y en el que la citada quejosa actúa como \*\*\*\*\* , en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 32 B Ter, 32 B Quáter, 32 B Quinquies y demás disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la Federación.

➤ El requerimiento realizado por la quejosa \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* para que proporcione la información y documentación relacionada al beneficiario controlador, derivado del contrato de intermediación bursátil 100519 en cumplimiento a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42 fracciones XII y XIII, 48-A, 49, primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior es así, ya que aún y cuando las autoridades se abstuvieron de rendir informe justificado respecto de dichos actos, por lo que en principio podrían tenerse por ciertos en términos del artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, de las constancias que integran los autos, específicamente del Acta \*\*\*\*\* \*\* expedido por el Titular de la Correduría Pública número \*\*\*\*\* \* \*\* de la \*\*\*\*\* \*\* , que contiene la fe de hechos del \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* , se advierte que las responsables no participaron en la emisión del primer acto enunciado, por lo que debe tenerse por inexistente, aunado a que el referido requerimiento fue formulado vía correos electrónicos por la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

quejosa \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* a diversa persona moral y no por alguna  
autoridad; máxime que de la lectura del instrumento en comento  
se advierte que se adjuntó al requerimiento hecho por la referida  
accionante un formato de “Carta Declaratoria/Propietario  
Real/Beneficiario Controlador” el cual carece de información al no  
identificar a ningún beneficiario controlador, por lo que se  
concluye que no se ha recabado, conservado u obtenido la  
información a que hace alusión la legislación que en esta vía  
combate, es decir, que la quejosa se ha ubicado en alguna de las  
hipótesis que ahí se mencionan por mandato de las responsables.

Por otro lado, en cuanto al segundo acto mencionado, se  
aprecia una solicitud escrita firmada por el Director Jurídico de  
\*\*\*\*\* a  
la \*\*\*\*\* , solicitándole su apoyo para dar  
cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 32-B Ter, 32-B  
Quárter, 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación,  
adjuntando un formato titulado “Carta Declaratoria”, el cual carece  
de información al no identificar a ningún beneficiario controlador.  
De modo que tampoco se aprecia la intervención de alguna  
autoridad, sino que se trata de una comunicación entre  
particulares.

Además, de dichas documentales se desprende que el envío  
de tales correos los llevó a cabo \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* y el escrito libre de  
fecha \*\*\*\*\* , lo realizó \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , es decir,  
no son actos que puedan atribuirse a las autoridades  
responsables, precisamente porque su generación es atribuible a  
las personas quejosas; lo anterior sin perjuicio de su calificación  
tocante a ser actos de autoridad.

Por analogía, es aplicable la Tesis I.4o.A.565 A, Registro  
digital: 172957, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  
Novena Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario  
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, marzo de dos  
mil siete, página mil setecientos cuarenta y cinco, de texto y rubro  
siguientes:

**“PREDIAL. LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO  
PREVISTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO  
FEDERAL IMPLICA UN COBRO QUE CONSTITUYE UN ACTO  
DE AUTORIDAD.** La autoliquidación o pago del impuesto predial  
que realiza el contribuyente como consecuencia de la obligación  
legal que le impone el Código Financiero del Distrito Federal de  
calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones  
tributarias, en los términos y mediante los formatos que la propia  
autoridad proporciona, constituye un acto de autoridad en la  
medida que, se enlaza con un acto jurídico unilateral que declara  
la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad  
administrativa, consistente en recibir dinero como pago de una  
deuda que constituye el cobro correspondiente. En consecuencia,  
de considerar al pago que voluntariamente efectúa el  
contribuyente, desvinculado de la recepción del monto que  
obtiene la autoridad, implica excluir de la tutela constitucional la  
actuación realizada de buena fe por el particular, lo que



VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

see en e



- omulgacio

reglas

on al rend

ENCIA). P

urídico

<sup>5</sup> Sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 65, primera parte, página 15, que señala: “**LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.**”





Al rendir sus informes justificados, tanto el **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos**,<sup>6</sup> como la **Jefa del Servicio de Administración Tributaria**<sup>7</sup> sostuvieron la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues consideraron que la parte quejosa no acreditó la afectación jurídica causada por las normas controvertidas.

El artículo 61, fracción XII, en cita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa o cuando se promueve contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5° del ordenamiento legal antes invocado, señala que la norma, acto u omisión reclamados deben producir una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El artículo 107, fracción I, constitucional, prevé uno de los principios rectores del juicio de amparo consistente en que dicha acción únicamente procede a instancia de “parte agraviada”, lo que se traduce en que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo.

En ese sentido, ha determinado que los elementos constitutivos del **interés jurídico** consisten en demostrar:

- a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y,
- b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.

Por su parte, para probar el **interés legítimo**, deberá acreditarse que:

- a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada;
- b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y,
- c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.

Asimismo, el Máximo Tribunal manifestó que los elementos

<sup>6</sup> Informe justificado registrado con el folio **6117**

<sup>7</sup> Informe justificado registrado con el folio **5013**



constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.<sup>8</sup>

En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales, adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las personas gobernadas, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de **autoaplicativas o heteroaplicativas**.

Destacó, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.

Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición



heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento.

Esas consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación que establece:

**JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.**

**PRINCIPAL**

**J.A. 239/2022**

**“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.** Para distinguir las leyes autoaplicativas de las

**INCONDICIONADA.** Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.”

En el caso, la quejosa \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* , es una persona moral cuyo objeto social y actividades se desprenden del **cotejo** efectuado por el Notario Público número \*\*\*\*\* , al instrumento notarial \*\*\*\*\* expedido por el Titular de la Notaría número \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\* ; en tanto que la diversa accionante, \*\*\*\*\* , tiene el objeto social a que se refiere el instrumento notarial número \*\*\*\*\* pasado ante la fe del Notario Público número \*\*\*\*\* del entonces \*\*\*\*\* .

Con los anteriores documentos las quejas acreditaron la personalidad para instar el juicio ante este juzgado de distrito; documentales a las cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

En ese contexto, acuden al juicio de amparo a reclamar la aprobación, expedición y promulgación del “*Decreto por el que se*





de noviembre de 2022”, por lo que el día 2.8.1.20, los ordena, pues con el fin de reclamar ésta que

reclama  
ésta que

**LA FEDERA**

morales, la  
o de fideicom  
caso de cu  
conservar, c  
o de Admini  
información  
adores, en la  
ne mediante  
arse a las a  
de un trata  
e contenga  
términos de

... persona que  
... actos jurídicos  
... celebración de  
... las entidades  
... s de la Ley  
... relativa a co  
... ención a obt  
... dores y a a

quando dica

morales, la  
o de fideicom  
caso de cu  
conservar, c  
o de Admini  
información  
adores, en la  
ne mediante  
arse a las a  
de un trata  
e contenga  
términos de

ción de  
blecido en  
ón deberá  
entes a la f  
plazo se po  
mpre y cuan  
ésta se p  
cionado.  
persona qu  
actos jurídic  
ebración de  
as entidades  
s de la Ley  
relativa a c  
ención a obt  
dores y a a  
ntidad, para  
ando dicha

persona que  
actos jurídicos  
celebración de  
as entidades  
s de la Ley  
relativa a co  
ención a obt  
dores y a a  
ntidad, para  
ando dicha



JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

VICTOR MANUEL MEXIQUERO GALAN  
30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores.”

**“Artículo 32-B Quáter.** Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.

b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares



internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.”

**“Artículo 32-B Quinquies.** Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales; las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.”

**“Artículo 32-D.** Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

(...)

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.”

**“Artículo 42.** Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

(...)

XII. Practicar visitas domiciliarias a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como, a terceros con ellos relacionados, a fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. Las visitas domiciliarias a que se refiere esta fracción se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este Código.

XIII. Requerir a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como a terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, a efecto de llevar a cabo su revisión para verificar el cumplimiento de los artículos 32, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. El ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 48-A de este Código.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor o pago de lo indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se trate, independientemente del ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general, el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado.”

“**Artículo 48-A.** Cuando las autoridades fiscales soliciten de los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deben proporcionar los informes, datos, documentos o contabilidad.

III. Los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos deberán ser proporcionados por el sujeto a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este ordenamiento, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales de los sujetos previamente



mencionados, quienes podrán ser notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este Código.

V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo. Los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, contarán con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los informes, datos, documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si, en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto con el que se entendió la revisión no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en la fracción IX de este artículo.

VII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refiere la fracción VI de este artículo, el sujeto revisado podrá optar por corregir su situación fiscal, mediante la presentación de la corrección de su declaración o de la información o documentación requerida por la autoridad, de la que se proporcionará copia a la autoridad revisora.

VIII. Cuando el sujeto revisado no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución para definir la situación de aquel sujeto, determinar las consecuencias y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se concluya el plazo señalado en la fracción VI de este artículo, la cual se notificará a los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere esta fracción se suspenderá en los casos previstos en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones I, II y III de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el oficio de observaciones de que se trate, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedarán sin efectos las actuaciones que se derivaron durante la revisión de que se trate.

En la resolución a que se refiere esta fracción deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada con el recurso administrativo y el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

IX. Las autoridades fiscales deberán concluir la revisión a que se refiere este artículo, dentro de un plazo máximo de doce meses, contado a partir de que se notifique la solicitud a que se refiere la fracción I de este artículo.

El plazo señalado en esta fracción se suspenderá en los supuestos previstos en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV y VI de este Código.

Si durante el plazo para concluir la revisión en las oficinas de las propias





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

autoridades, los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código interponen algún medio de defensa en México o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades previstas en este artículo, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte la resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos previstos en este artículo, ésta se entenderá concluida en la fecha en que venza el plazo de que se trate, quedando sin efectos las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha revisión.

X. Las autoridades fiscales que conozcan de hechos u omisiones que entrañen el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las sanciones que correspondan mediante resolución. Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones de alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 42, fracción XIII de este Código, le darán a conocer a éstos el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar Los hechos consignados en el mismo, dentro del plazo a que se refiere la fracción VI de este artículo.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias de los sujetos a que se refiere la fracción XIII del artículo 42 de este Código.”

“Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones V, XI y XII del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, asesores fiscales, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, los últimos tres en el caso de fideicomisos, y en el de las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, así como de terceros con ellos relacionados, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, o donde se realicen actividades administrativas en relación con los mismos, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera o donde presten sus servicios de asesoría fiscal a que se refieren los artículos 197 a 202 de este Código, o donde se realicen las actividades, se celebren, ejecuten, tengan efectos, documenten, registren o inscriban los actos jurídicos que den lugar al cumplimiento de las obligaciones que establecen los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código.

II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta o actas que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.

IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta o actas en las que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código y su Reglamento o, en





V. Si al cierre de cada una de las actas de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar las mismas, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en cada una de ellas, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de las mismas; debiendo continuarse con el procedimiento de visita, o bien, dándose por concluida la visita domiciliaria.

**“Artículo 84-M.** Son infracciones relacionadas con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código, las siguientes:

*II. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código.*

**“Artículo 84-N.** A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-M de este Código, se le impondrán las siguientes multas:

II. De \$800,000.00 a \$1,000,000.00 a la establecida en la fracción II, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

III. De \$500,000.00 a \$800,000.00 a la establecida en la fracción por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.”

### Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo



Juicio de amparo 239/2022

**JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.**

**PRINCIPAL**

**J.A. 239/2022**

*32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.*

Quando no se identificar a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

CFF 32-B Ter, 32-B Quáter

*Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador.”*

**“2.8.1.21.** Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos:

*I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica.*

*Para efectos de lo anterior, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, requerirán de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), conforme a lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter del CFF, para que revelen su identidad, y proporcionen la información que se detalla en la regla 2.8.1.22.*

II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los



dece el artículo

documentación con  
se refiere e

artículo 30 de  
no de las au  
e accedan

s beneficiari  
s, corredore  
celebración  
tución de p

otra figura ju  
o hará a trav  
rmidad con l

es del sistema  
obligaciones  
de confor

quies, 134, R

caso de cu

B Ter, primo  
deicomitante  
per contratto

deberán inte  
n respecto d

les deben c  
itado la iden

caso de te

otros países  
fectos fiscales  
ción oficial.  
ción fiscal o

efectos fisc  
yuge y régi  
inario, de se

números telefónicos  
que ostentan

a moral o e  
derechos de  
en o servic





JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

XV. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).  
XVI. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral.

XVII. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.

XVIII. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XIX. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo.

XX. Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXI. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXII. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas.

II. País o jurisdicción de creación, constitución o registro.

III. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

IV. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

V. Domicilio fiscal.

CFF 30, 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 134, RMF 2022 2.8.1.20., 2.8.1.21., 2.8.1.23.

Información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores.”

“2.8.1.23. Para los efectos del artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.1.22., fracciones I a XII, la siguiente:

I. Datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica.

III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.

IV. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica.

V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.



**VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.**

**VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.**

CFF 32-B Ter, RMF 2022 2.8.1.21., 2.8.1.22.”

Asimismo, debe traerse a contexto, la exposición de motivos de las normas generales reclamadas, la cual establece:

“...

26. Regulación en materia de beneficiario controlador A fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI.

Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud.

Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición, debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global; evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia.

El concepto de beneficiario controlador del GAFI, adoptado por el Foro Global, es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad.



JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

En este contexto se somete a consideración de esa Soberanía adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quater y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.

Lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese sentido, para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma, objeto de esta propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad.

Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica.

En este sentido, se somete a consideración de esa Soberanía la adición de los artículos 84-M y 84-N al Código Tributario, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario controlador.

...

Asimismo, en la **exposición de motivos** respectiva, sobre el tema que interesa, se indicó:

“...

**26. Regulación en materia de beneficiario controlador**

A fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del

Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI.

Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la **evasión fiscal**, el financiamiento





del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud.

Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición, debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global; evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia.

El concepto de beneficiario controlador del GAFI, adoptado por el Foro Global, es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad.

En este contexto se somete a consideración de esa Soberanía adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quater y 32- B Quinques para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.

Lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese sentido, para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma, objeto de esta propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad.

Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso



de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica.  
En este sentido, se somete a consideración de esa Soberanía la adición de los artículos 84-M y 84-N al Código Tributario, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario controlador.  
...”

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

De esas reproducciones se desprende que en dichas normas generales se prevé un sistema normativo complejo, integrado por normas heteroaplicativas tendentes a regular el **sistema de contabilidad y verificación de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores en los actos jurídicos**, que precisa de la materialización de diversos actos jurídicos, tal como se explicará a continuación.

Ahora bien, debe destacarse que los sujetos obligados a proporcionar la información requerida en dichos numerales, esto es, a quienes está dirigida dicha obligación fiscal, son:

- a) Primera categoría. Las personas morales fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios en fideicomisos; contratantes o integrantes en cualquiera figura jurídica.
- b) Segunda categoría. Notarios, corredores o cualquier persona que intervenga en formulación o celebración de contratos o actos para la constitución de dichas personas, celebración de fideicomisos o cualquier otro acto; así como las entidades financieras e integrantes del sistema financiero.

Este punto es importante, dado que para la aplicación de las normas en estudio es insuficiente ser sujeto de la norma (cualquiera de dichas categorías), sino que, además, se requiere la existencia de diversos actos jurídicos (condicionantes), como son la existencia de fideicomisos o celebración de contratos en los términos ahí indicados, así como la existencia de un requerimiento por parte de la autoridad tributaria.

De esta forma, la autoridad fiscal podrá requerir la presentación de los documentos respectivos a ambas categorías de personas. El procedimiento (heteroaplicativo) respectivo se integra por:

1. Presentación de solicitud de información, la cual podrá ser notificada a los beneficiarios controladores o a terceros relacionados.
2. Dicha información deberá ser presentada dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación.
3. Dicho plazo podrá ampliarse.

Así, aunque la información de mérito es considerada como parte de la contabilidad de la persona contribuyente, ello no impide considerar que se deberá presentar la información generada a partir de las propias reglas previstas en la

VÍCTOR MANUEL MEXIQUERO GALÁN  
30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01



tenerse  
Fiscal de  
abilidad.

tribuyentes  
artículo 3  
informac  
existencia  
le quince  
modificad  
la existen  
jurídicos  
los indic

beneficiario o  
número 32 B  
físicas que  
e otra u o  
el beneficio  
un fidei  
quier otro  
ejerce o e  
ento o dis  
aliza una  
tingente.

identificar  
persona m  
controlador  
control (ti

socio c  
ministrado  
uno de

locantes a  
onga a la  
s Recome  
Internaci  
cambio c  
la Orga  
micos, d  
que Mé





términos del anexo A del Mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

Atento a lo anterior, la finalidad perseguida por dichas medidas se vincula como una disposición para combatir la evasión fiscal, pues las normas reclamadas del Código Fiscal de la Federación fueron creadas a efecto de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Foro Global en niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales.

En ese contexto, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo Federal presentó del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, entre los que destacan en el caso en concreto, los artículos **32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 32-D fracción IX, 42, fracciones XII y XIII, 48-A, 49 primer párrafo, fracciones I y VI, 84-M y 84-N** del Código Fiscal de la Federación, que además de ser una serie de medidas que responden a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano; también fueron diseñados con la finalidad de abatir diversos esquemas de riesgo de elusión fiscal, entre los que destacan aquellas personas o grupo de personas físicas que obtienen un beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan de forma contingente o directa, o indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Asimismo, a efecto de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Servicio de Administración Tributaria, emitió la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós y su anexo diecinueve, en particular las reglas **2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23**, establecieron los criterios que deben seguirse para dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84 del Código Fiscal de la Federación.

De tal suerte que las normas reclamadas tienen como objetivos principales los siguientes:

- a) Identificar a las personas o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se benefician económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una

VICTOR MANUEL MEXIQUERO GALAN  
30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01



instancias  
nciera Inter  
financiamie  
transaccion  
ro de orig

ídica, la ju  
a quiniento  
cisiete, ton  
ón, Décima

**ARTÍCULO 76-A** La Organización de Estados Americanos (OEA) a partir de 2015, en sus reuniones de trabajo, deberá tener en cuenta los intereses de los pueblos indígenas.

... como misión principal de las empresas en la cooperación económica internacional se celebraron con los organismos de asistencia Administrativa (OEA).

ntención y el  
nfidencialidad  
dotar a las  
rificar el cum  
DE y los país



*actúe, de ser el caso, anticipadamente a actos de elusión y evasión fiscal."*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

En ese sentido, el incumplimiento de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores cuando la autoridad hacendaria así lo requiera, es considerada una infracción administrativa y podrá ser sancionada en términos de los numerales 84, fracción M, y 84, fracción N, del Código Fiscal de la Federación; siendo que dichas normas, por sí mismas, son de naturaleza heteroaplicativa.

Aquí es importante señalar que, si bien en dicha normatividad se prevé la obligación contable relacionada con llevar (actualizar), obtener (procedimientos), conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores; ello se condiciona a la constitución de fideicomisos, actos o contratos en los cuales se advierta la participación de un beneficiario controlador porque, en lo general, tenga control directo accionario o decisorio respecto de tales actos jurídicos.

De este modo, es evidente que el sistema normativo califica como heteroaplicativo, pues requiere de diversas conductas, ya sea de un acto jurídico del particular tocante a la obtención de dicha información con base en el análisis de su propia contabilidad, la celebración de un contrato o acto jurídico ante un notario, institución financiera o cualquier otro que evidencie la existencia de dichos beneficiarios, así como el requerimiento de la autoridad atinente a tal identificación.

Este punto es de especial relevancia, pues si bien en el citado numeral 32 Bis TER, se indica que deberán obtener y conservar, como parte de su contabilidad, dicha información. Lo que implica una obligación condicionada a un acto jurídico en el cual exista una persona que tenga el carácter de beneficiario controlador.

Por ello, dicho sistema normativo, por sí mismo no tiene como finalidad individualizar una obligación para todos los contribuyentes, sino solamente a aquellos que celebren fideicomisos, o cualquier otra figura jurídica en la cual exista una persona o conjunto de personas jurídicas que ejerzan control u obtengan un beneficio derivado de su participación en una moral.

De este modo, para la individualización de dicha norma **deberá llevarse a cabo un acto jurídico en el que se identifique dicho beneficiario, de acuerdo con la propia normatividad fiscal**. Sin que pueda advertirse su materialización de individualizada por su sola entrada en vigor, ya que no se vincula a la presentación de declaración alguna, sino solamente a llevar dicha contabilidad y actualizarla, lo que se debe verificar con base en la celebración de actos jurídicos, ya como documentos originarios o de actualización de su situación fiscal.

Este punto es de especial relevancia, en virtud de que el sistema normativo no prevé la presentación de declaración relacionada con la identificación de los beneficiarios controladores,





VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

ción de esos  
la autoridad

la en vigor  
s, y evidenc  
ocante a la  
entificara el  
ia de requie  
se advierte  
agraviada,

a, equivaldr  
cierta, relac  
s, o bien, pr  
rimiento en e  
controladores  
nbatida; emp  
es, sobre to  
voluntad de la

**ACREDITARLO**

**ACREDITARLO**

o de amparo pud  
a que la acción  
o de actos, sea p  
n términos de lo  
y por el artículo  
lo que significa  
procedencia de l  
oso, el cual no p  
verse el juicio  
la pretensión de  
strar que la ley  
ionando sus dere  
entre dentro de  
constitucionalidad  
te en acreditar e  
il Pleno de la ho  
da en la página  
mil novecientos

ofrecieron c  
notariales \*\*  
blica número  
o \*\*\*\*\*  
tario Público  
\*\*\* \*\* \*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

\*\*\*\* del entonces \*\*\*\*\*, testimonio del Acta \*\*\*\*\*,  
\*\*\*\* expedido por el Titular de la Correduría  
Pública número \*\*\*\* de la \*\*\*\*, que  
contiene la fe de hechos de \*\*\*\*\*,  
\*\*\*\*\*, por virtud de la cual \*\*\*\*\*,  
\*\*\*\*\*, en su calidad de  
fiduciario, solicita le sea proporcionada la información y  
documentación correspondiente al beneficiario controlador de la  
operación respectiva; la cédula de identificación fiscal de la  
quejosa \*\*\*\*\*,  
\*\*\*\*\*, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, constituye un hecho notorio para este órgano de  
control constitucional la publicación en el Diario Oficial de la  
Federación la “Resolución por la que se autoriza la organización y  
operación de una institución de banca múltiple que se denominará  
\*\*\*\* en fecha \*\*\*\*\*,  
así como la diversa divulgación en el referido medio de difusión de  
la “Resolución mediante la cual se modifica la autorización  
otorgada a \*\*\*\* para organizarse y operar como  
Institución de Banca Múltiple”, datada el \*\*\*\*\*,  
\*\*\*\*”.

De lo anterior se desprende que las quejas son personas  
morales con capacidad jurídica para celebrar actos jurídicos, así  
como actuar y participar en calidad de fiduciarias; que se  
encuentran obligadas llevar un sistema de contabilidad, y a  
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la  
información que este les requiera; sin embargo, no se acredita la  
individualización de las normas reclamadas, pues dichos actos o  
los procedimientos de identificación de tales beneficiarios no se  
individualizan por sí solos, esto es, por su sola entrada en vigor, y  
por el sólo carácter de fiduciarios, porque precisan de la  
celebración de actos o contratos, así como de requerimientos de  
la autoridad; aunado a que se deben aplicar los procedimientos  
respectivos para identificar a dichos beneficiarios controladores, lo  
que es obligación formal de la quejosa y no de la suscrita, pues se  
refiere a la forma y términos de la integración de su contabilidad,  
esto es, incluso, debe tener los asientos respectivos en su  
contabilidad en los términos indicados en dicho sistema normativo  
combatido.

Solo de esa forma, es que se advertirá que una persona o  
grupos de personas efectivamente controlan o se benefician  
económicamente de una persona jurídica, porque exista control o  
beneficio económico derivado de la técnica de acciones, o bien,  
por ser un porcentaje de participación significativa en el derecho a  
voto o a la capacidad para nombrar o remover a los miembros  
directivos de la entidad; lo que no puede advertirse con la sola  
entrada en vigor, dado que deben de verificarse diversos  
procedimientos en los términos indicados en las normas  
reclamadas, puesto que se necesita verificar algún acto del propio  
contribuyente, tercero o autoridad fiscal, para identificar tal hecho  
y dar cumplimiento a las obligaciones respectivas.

VÍCTOR MANUEL MEXIQUERO GALÁN  
30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01



A mayor abundamiento, se advierte que de las documentales anexadas por las quejas, no se desprende que hayan llevado a cabo algún acto jurídico con efectos fiscales, en el cual se identifique plenamente a un beneficiario controlador en términos de las normas reclamadas, o que se haya requerido por parte de la autoridad la información respectiva.

Al respecto, del contenido del testimonio del Acta \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* expedido por el Titular de la Correduría Pública  
número \*\*\*\*\* de la \*\*\*\*\* , se aprecia que  
el fedatario hizo constar que el \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , el delegado fiduciario de la queja \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , envió un  
correo electrónico y archivo adjunto, solicitando a quien aduce ser  
la encargada de \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , para que proporcionara información y documentación  
relacionada al beneficiario controlador, derivado de su futura  
participación como "Fideicomisario" en el \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* previamente constituido y en  
el que su representada actúa como "Fiduciario".<sup>9</sup>

Sin embargo, lo anterior no demuestra en modo alguno que  
se haya aplicado a la esfera jurídica de las accionantes el sistema  
normativo impugnado, en virtud de que, en principio, no media un  
requerimiento formulado por la autoridad hacendaria, pues  
únicamente se aprecia del acta en cuestión, que tuvo verificativo  
una comunicación entre quien aduce ser la queja \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* y  
quien aduce es \*\*\*\*\* , quien es la persona  
encargada por parte de \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , y quien es titular de los correos  
\*\*\*\*\* ; para que le proporcionara  
información sobre el beneficiario controlador del fideicomiso  
\*\*\*\*\* . De ello se sigue que no existe un requerimiento de  
autoridad hecho a la gobernada, ni tampoco se demostró que  
proporcionó información fidedigna y completa de los beneficiarios  
controladores del aludido fideicomiso, pues no se tiene la certeza  
de que efectivamente recabó, obtuvo o conservó dicha  
información, sino solamente consta que se hizo una solicitud que  
además, carece de la información relacionada con el beneficiario  
controlador.

Además, se observa de la fe de hechos en comento, un  
formato que no está lleno y **carece de la información que exige  
el sistema normativo impugnado, de modo que no fue posible  
identificar a ningún beneficiario controlador**; máxime que el  
correo electrónico que se menciona, hace alusión a una futura  
participación como fideicomisario, lo que supone que aún no  
existe un beneficiario controlador, en los términos indicados en el  
artículo 32-B Quáter del Código Fiscal de la Federación, ya que no  
se ha identificado.

<sup>9</sup> Documento exhibido en el escrito registrado con el folio **5087** del índice de este juzgado federal





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

A la misma conclusión debe llegarse en relación a la documental consistente en la solicitud firmada por \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, de fecha \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* y dirigida a la moral \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, y al que se adjunta un formato titulado “Carta Declaratoria” que no contiene información y que no corresponde a la forma y términos indicados por el Servicio de Administración Tributaria conforme a la normatividad reclamada.

A más de que las documentales aportadas por los accionantes, por sí solas, son **insuficientes** para acreditar que se encuentran dentro de los supuestos de las normas que reclaman, pues contienen afirmaciones genéricas de constitucionalidad de los actos, entendidas como aquéllas que no le reconocen a quien promueve el amparo el carácter que ostentan, ni la veracidad de los documentos, pues su justificación se realiza únicamente en función de las normas impugnadas.

Aunado a que de acuerdo con los numerales 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, la información relativa al tema que aquí interesa, deberán presentarse, en todo caso, en las formas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, ello porque surte efectos jurídicos la observancia de la obligación fiscal, pues no es dable tenerla por satisfecha con procedimientos de gestiones entre particulares sin vinculación a la norma respectiva; de ahí que no pueda advertirse como un acto de individualización de los artículos reclamados.

En efecto, la existencia del acto de aplicación de las normas supone su individualización en su esfera normativa, lo que implica su observancia y materialización en un acto jurídico. Por tanto, si la propia norma prevé la presentación de una declaración en la cual deberán proporcionar la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general, es evidente que las solicitudes presentadas por las accionantes no individualizan los actos de aplicación, porque son un mero envío de solicitudes entre particulares que no dan noticia en los términos previstos en las normas reclamadas, sobre la información fiscal requerida.

Más todavía, porque en ella la quejosa solo se limita a solicitar a un tercero, información en términos de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, del Código Fiscal de la Federación, pero no se desprende que ello le cause perjuicio alguno en lo tocante a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información descrita en los preceptos jurídicos reclamados; de ahí que no se desprenda afectación alguna en su perjuicio.

Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 170500, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente:

VICTOR MANUEL MEXIQUERO GALAN  
30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que es del tenor literal siguiente:

**“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.** El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.”

Ahora bien, de autos se advierte que las morales quejasos acreditaron sus respectivos objetos sociales.

[illegible]

**PRINCIPAL**

**J.A. 239/2022**

## En tanto





[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\* \* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Lo anterior, pues las gobernadas exhibieron los instrumentos notariales mediante los cuales acreditan que realizan dichas actividades.

Sin embargo, se reitera, es claro que la parte quejosa no demostró que tiene el deber de informar sobre dichos beneficiarios controladores, porque no exhibió acto o contrato alguno del cual derive su obligación de informar, llevar la contabilidad y, en su caso actualizarla; y, sobre todo, identificar dichos beneficiarios en términos de las propias normas reclamadas. Aunado a que tampoco demostró que la autoridad hacendaria le requirió tal información, o incluso, como tercero, le haya notificado el requerimiento respectivo.

Además, para los fines que atañen a esta sentencia, resultaba necesario el ofrecimiento de diversos medios de prueba que evidenciaran que la parte quejosa estaba dentro de los supuestos normativos impugnados, precisamente, a partir de su individualización, por esos motivos, este juzgado de Distrito no puede verificar el interés jurídico con las solas declaraciones exhibidas por las contribuyentes o porque hizo una solicitud vía correo electrónico sobre una futura participación como fideicomisario a diversa moral, dado que debe cumplir con remitir la información requerida en los términos prescritos por las propias normas reclamadas, y no con escritos libres, aunado a que no se advierte en todo caso que haya mediado requerimiento de la autoridad hacendaria, ni tampoco que haya proporcionado, conservado o actualizado la información de un beneficiario controlador en concreto.

En efecto, los supuestos normativos en estudio, constituyen aspectos que deben ser probados de manera indubitable, para así advertir la afectación del sistema normativo y hacer procedente el juicio constitucional.

Sirve de apoyo analógico, la tesis 2a. CLII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la



VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se:





RESUELVE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ÚNICO. Se **sobresee** en el juicio de amparo a que este expediente se refiere.

JUZGADO TERCERO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

PRINCIPAL

J.A. 239/2022

NOTIFÍQUESE; ELECTRÓNICAMENTE AL FISCAL  
EJECUTIVO TITULAR ADSCRITO.

Así lo resolvió y firma electrónicamente **Yadira Elizabeth Medina Alcántara**, Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; quien actúa con **Víctor Manuel Meixueiro Galán**, **Secretario** que autoriza y certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo. **Doy fe.**

En esta misma fecha se giraron los oficios 48581, 48582, 48583, 48584 y 48585, a fin de notificar el auto que antecede. Conste.

A las nueve horas del \_\_\_\_\_, con fundamento en los artículos 24, 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a las partes la actuación que antecede por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional con excepción de los casos en que se haya ordenado su notificación de manera personal, por oficio o de forma electrónica.- Doy fe.

VÍCTOR MANUEL MEIXUEIRO GALÁN  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32  
07/08/24 16:12:01

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:  
37372203\_0534000029525721037.p7m  
Autoridad Certificadora:  
AUTORIDAD CERTIFICADORA  
Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	VICTOR MANUEL MEIXUEIRO GALAN		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.37.30.36.36.31.32		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	04/11/22 04:23:33 - 03/11/22 22:23:33		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	85 08 8d 7c ef b4 25 8d 01 a2 dc 6f 25 fe 00 8b 6b 08 fd 4a a7 aa ee ac f2 92 77 1a d0 ed 08 d7 0d d2 1a 9b 84 83 b8 89 2a 4d bd 3d c7 79 99 6f 8e 11 cb 84 a7 dd 3e 73 f8 b1 dd 69 d1 6b 61 58 3d 89 1d 81 0e e3 4e c9 89 b0 dc b1 0b bd 99 c8 76 a4 91 2a 77 ea 14 81 be 9c 6b 43 79 f5 f2 c8 7c bf 88 86 18 5a 4d 91 9b 27 82 9d ad d7 15 dc ac a7 35 e0 08 a9 dd a6 0c 0d a1 36 e7 b0 7f 19 6b d3 8b 37 30 ef 8b 65 c8 6e b8 0e 87 12 a0 0d 0a 22 af b2 21 c1 64 c1 cc 07 8f 47 64 5d 22 18 4b 28 9f 85 72 ed 57 09 4c 29 11 98 87 02 b4 f5 8c ae 57 a3 d3 ba b3 1e 39 f0 a3 90 b5 ba bd b5 1a 13 9b b3 23 27 07 69 b8 eb c3 3f 7a 4e 91 38 a8 f6 72 f8 e6 1b c1 93 6c 70 49 e8 38 29 7a df df df 7d 17 28 be 20 b8 04 dd cd 2f 30 bc 18 2d 41 8e 09 c6 51 48 ca 59 1f 47 3f 73 6c 01 c3 88				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	04/11/22 04:23:25 - 03/11/22 22:23:25				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP SAT				
Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA				
Número de serie:	30.30.30.30.31.30.38.38.38.38.38.30.30.30.30.33.39				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	04/11/22 04:23:34 - 03/11/22 22:23:34				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	12057905				
Datos estampillados:	HpKEg8elVXZtpL472sZ3+mg0yl=				



## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	YADIRA ELIZABETH MEDINA ALCÁNTARA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.21	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	04/11/22 04:34:42 - 03/11/22 22:34:42	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	85 5a 60 27 b7 7f 81 17 4f a4 da af 10 2a 45 9f 20 dd 0e ce 61 f3 a5 0a 97 04 e1 03 d1 cb 91 8d 83 4e 81 00 33 85 ba a1 f0 49 8a 3f 8e b9 d3 a5 43 75 b6 4a 73 a0 c3 45 e7 1e 77 57 1d ab c1 a2 c4 2a d1 db 6d 39 60 0e 27 2e 12 67 c9 6f da e7 1f 47 7d d7 4d b4 4d 53 65 ef 01 af 85 c6 4e fe 2e 74 52 1d b6 11 fb 9c 3d 10 b7 1b a8 e0 fe ae 81 00 b5 6a d6 55 b6 5a d9 43 48 21 22 a8 e1 e4 46 15 84 24 90 62 03 dc 09 02 af ca 04 5e 0d 64 39 0b 2e b5 7d 00 fa c6 77 39 89 0c 51 51 19 08 c0 dc 98 fc 60 d7 a1 e0 d4 fd c2 a1 6a 35 a7 76 f2 db 44 2b 00 b5 19 a0 5d e1 7c 7c d2 9b dc 72 2b e4 85 b4 a1 33 9e b2 53 dc 33 03 4a a5 aa a1 9a e8 dd 01 5b b8 3c 37 d9 ee c6 a3 a0 99 0f 42 87 fd ac 91 08 d3 8f c0 49 4d c4 f5 57 a1 ca bd db 75 d7 8b 9d 53 d6 d4 c4 44 af e8 22 cd d9 2d			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	04/11/22 04:34:42 - 03/11/22 22:34:42			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	04/11/22 04:34:43 - 03/11/22 22:34:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	12059358			
Datos estampillados:	/2r0Bpko0XQ/b5Po/4ZKws6wov4=			



El licenciado(a) Victor Manuel Meixueiro Galán , hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.